

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

**Medellín, seis (6) de julio de dos mil veintiuno (2021)**

Apelación sentencia

Exp. 2018-00716

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, vencido el término de traslado establecido en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, procede a dictar la decisión correspondiente en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por BLANCA LIGIA GARCIA DE MEJIA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- (Rad. 05001-31-05-001-2018-00716-01).

#### **ANTECEDENTES**

Pretende la accionante el reajuste o reliquidación de la sustitución pensional de manera retroactiva, intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y/o la indexación de las condenas y las costas del proceso (fl. 3).

Como sustento de sus pretensiones en síntesis sostuvo lo siguiente: contrajo matrimonio católico con el señor José Alberto Mejía Londoño el 13 de enero de 1962, conviviendo desde entonces en forma permanente e ininterrumpida, compartiendo techo, lecho y mesa hasta el día en que éste falleció el 13 de febrero de 2010; el señor Mejía Londoño para el momento de su muerte ya ostentaba la calidad de pensionado por vejez, prestación que le fue reconocida mediante Resolución No. 005336 de 2004, a partir del 9 de diciembre de 2002, en cuantía inicial de \$1.509.955, prestación que al momento del fallecimiento ascendía a la suma de \$2.307.804, tal como lo demuestra la colilla de pago; con ocasión del fallecimiento del señor José Alberto, actuando en calidad de cónyuge supérstite del pensionado, el 5 de marzo de 2010 solicitó ante el ISS, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes; el 8 de marzo de 2010 se presentó la señora Alba Rocío Pérez Agudelo en calidad de compañera pretendiendo el reconocimiento y pago de la misma prestación; la entidad mediante Resolución 013889 del 31 de mayo de 2011, negó la pensión requerida tanto por ella como por la señora Pérez Agudelo con el argumento que ninguna de ellas acreditaban los requisitos exigidos por el artículo 47 de la Ley 10 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para ser consideradas como beneficiarias de la pensión de sobrevivientes; inconformes con la decisión, en calidad de cónyuge y compañera permanente, acudieron a la vía judicial a reclamar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del pensionado José Alberto Mejía Londoño, proceso que fue tramitado en el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, bajo el radicado 05001 31 05 013 2011 01082; el 26 de julio de 2013, el Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín, profirió sentencia condenatoria a favor de ambas partes, ordenando reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes en favor de la señora Blanca Ligia García de Mejía en calidad de cónyuge en un porcentaje del 79%, y en favor de la señora Alba Rocío Pérez Agudelo en calidad de compañera permanente en un porcentaje del 21%, sobre la pensión del salario mínimo legal mensual vigente para dicha anualidad, junto con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, decisión que confirmó la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín el 30 de noviembre de 2015; una vez en firme la decisión, solicitó el cumplimiento y pago de la sentencia, ante lo cual Colpensiones notificó el 16 de enero de 2017 la Resolución GNR 198479 del 6 de julio de 2016, con la

cual procedió a dar cumplimiento a la sentencia judicial, ordenando reconocerle y pagarle la pensión de sobrevivientes en un porcentaje del 79% sobre el IBL del salario mínimo para el año 2010, estableciendo la cuantía de la prestación para el año 2013 en \$465.705, para el 2014 en \$486.640, para el 2015 en \$509.036 y para el 2016 en \$544.669, liquidando por concepto de retroactivo pensional la suma de \$68.700.733, dineros que fueron cancelados en la nómina de julio pagadera en el mes de agosto de 2017; inconforme con los valores cancelados por Colpensiones, hizo revisar el acto administrativo y las sentencias proferidas en su caso, enterándose que la pensión de sobrevivientes había sido reconocida en cuantía inferior a la que correspondía, motivo por el cual el 29 de septiembre de 2017 solicitó un nuevo estudio de pensión ante la entidad, teniendo en cuenta para ello el valor de la mesada pensional de \$2.307.807 que percibía el pensionado para el año 2010, con lo cual obtendría una mesada pensional pro \$1.823.165 para ese mismo año, mesada superior a la reconocida por la demandada mediante la Resolución GNR 198479 de 2016; Colpensiones mediante Resolución SUB 257074 de noviembre de 2017 resolvió de forma negativa la solicitud presentada, argumentando que ya había dado cumplimiento a la decisión judicial; ante la negativa de la entidad, solicitó aclaración y/o corrección de la sentencia judicial el 21 de febrero de 2018, solicitud que fuera desestimada por el Juez Trece Laboral del Circuito de Medellín, manifestando que se le había vencido el término para haber realizado la solicitud, reiterando que la sentencia proferida en su momento era clara en su contenido y decisión; ante tal decisión interpuso los recursos de reposición y apelación dentro del término, los cuales fueron resueltos desfavorablemente por la *a quo*, apoyándose en los mismos argumentos expuestos en el auto recurrido; le asiste el derecho a lo pedido (fls. 1/3).

La entidad demandada en oportunidad dio respuesta a la demanda. Aceptó la mayoría de los hechos excepto el que hace referencia al valor de la mesada del pensionado fallecido. En lo esencial se opuso a la prosperidad de lo pedido. Como excepción previa propuso la de no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios, indebida integración del contradictorio, de la que mediante memorial presentado al despacho desistió. Como

excepciones de mérito formuló las que denominó inexistencia de la obligación de pagar reliquidación o reajuste de sustitución pensional, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, ausencia de causa para pedir, prescripción y compensación (fls. 60/68).

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 6 de julio de 2020, declaró probada la excepción de cosa juzgada de manera oficiosa y, en consecuencia, ABSOLVIÓ a Colpensiones de todas las pretensiones formuladas en su contra por la señora BLANCA LIGIA GARCÍA, a quien le impuso las costas, fijándole como agencias en derecho la suma de \$877.803.

Inconforme con la decisión, interpuso el recurso de apelación el apoderado de la parte actora, a quien le fue concedido. Manifiesta su disenso indicando que en el de autos no ha operado la cosa juzgada, por cuanto en este proceso el tema de debate se centra es el derecho que le asiste a la demandante a la reliquidación de una mesada pensional, más no el derecho a la pensión de sobrevivientes que fue lo discutido en el otro proceso.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES

La Sala restringirá su estudio a los puntos objeto de apelación planteados por el apoderado recurrente en la sustentación del recurso de apelación, conforme a las directrices que para el efecto traza el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 712 de 2001.

No es tema de discusión al interior del plenario que al señor JOSÉ ALBERTO MEJÍA LONDOÑO la entidad demandada le reconoció una pensión de vejez mediante Resolución No. 005336 de 2004, a partir del 9 de diciembre de 2002 en cuantía de \$1.509.955 para ese año. Tampoco se discute que a la señora BLANCA LIGIA GARCIA DE MEJÍA, mediante sentencia del 26 de julio de 2013 del Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión del Circuito, confirmada por la Sala Primera de Descongestión de esta Corporación, le fue reconocida una pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite, en un porcentaje del 79% del salario mínimo legal mensual, a partir del 13 de febrero de 2010, y el otro 21% le correspondió a la señora ALBA ROCIO PÉREZ AGUDELO, en calidad de compañera permanente; fallo este que fue cumplido por la entidad demandada mediante Resolución GNR 198479 del 6 de julio de 2016, en la que se ingresó a la demandante *“en la nómina del periodo 201607 que se paga en el periodo 201708 (sic)”*.

Así las cosas, el tema de debate se circunscribe a determinar si a la señora BLANCA LIGIA GARCIA DE MEJIA le asiste el derecho al reajuste de la mesada pensional de sobrevivientes hasta alcanzar el valor que devengada su cónyuge como pensionado por vejez al momento de su muerte.

Para denegar las súplicas de la demanda, la juez de instancia argumentó que en el asunto de marras operaba la cosa juzgada, dado que se presentaban los elementos constitutivos de la misma para declararla de oficio, como lo son la identidad de partes, de objeto y de causa y, por tanto, absolvió a Colpensiones de las pretensiones incoadas en su contra por la parte demandante.

Pues bien, lo primero por señalar es que tales argumentos no son de recibo por parte de esta Sala de Decisión Laboral, por cuanto analizado el material probatorio obrante al interior de las diligencias, se llega a una conclusión completamente diferente a la obtenida por la juzgadora de instancia.

En tal sentido, debe señalarse sobre la cosa juzgada que el artículo 303 del C. G. del P., aplicable por analogía al proceso laboral, con fundamento en el artículo 145 del C. P. del T, en su inciso 1º establece:

*“La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes”.*

Para que pueda afirmarse la existencia de la cosa juzgada en el plano judicial, se ha exigido, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, la presencia de tres identidades básicas: objeto (*eadem res*), causa petendi (*eadem causa*) y partes (*eadem conditio personarum*).

La doctrina, al ocuparse de tales elementos, anota:

*“El punto de partida en esta materia es el de que, por principio, la cosa juzgada alcanza tan sólo a los que han litigado; quienes no han sido partes en el juicio anterior no son afectados por ella... Por lo pronto, parece indispensable destacar que cuando se habla de **objeto** en la cosa juzgada, se alude al bien jurídico disputado en el proceso anterior. No se trata, en nuestro concepto, del derecho que se reclama... La jurisprudencia ha acogido reiteradamente la idea de la doctrina de que la **causa petendi** es la razón de la pretensión o sea el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio”* (Eduardo J. Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1988, págs. 422, 433 y 435).

En un asunto de contornos similares al aquí debatido, la Corte Constitucional en sentencia T-534 de 2015, señaló lo siguiente:

*“Para la Corte, el juez colegiado comprendió que la causa de un*

*proceso corresponde al material probatorio de los expedientes, medios de convicción que se identificaron con la historia laboral que se allegaron a los dos trámites. De igual forma entendió que el objeto del proceso se agota en el derecho reconocido, el cual incluye la pensión de vejez y su monto.*

*Tales consideraciones no corresponden con el contenido de la causa petendi y objeto de un proceso, error que significó que el juez declarara la cosa juzgada de la pretensión de reliquidación de la pensión de vejez de la tutelante. Esta Corporación advirtió que esas figuras corresponden con los hechos que llevaron a la demanda y la calificación jurídica que el interesado hizo de los elementos fácticos en el libelo (causa), así como la petición del actor, la resistencia a ésta y su resolución (objeto).*

*En el caso concreto, se concluye que no existió la identidad de causa y de objeto entre el proceso que reconoció la pensión de vejez y el trámite que discutió la reliquidación de esa prestación.*

*En el primer proceso, la actora sustentó la petición de reconocimiento de su derecho a la pensión de vejez en que cotizó 1.022 semanas al sistema de seguridad social y cumplió la edad para acceder a esa prestación. Además, señaló que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 tenía más de 35 años. También informó que presentó petición de reconocimiento pensional al ISS, institución que negó esa postulación. Finalmente, advirtió que cotizó un promedio de \$ 2.850.00 y el Instituto de Coldeportes canceló al ISS la suma de \$ 45.000.000.00 (Folio 21 Cuaderno 2).*

*El demandante calificó los hechos mencionados como el cumplimiento de los requisitos del derecho de pensión de vejez en el marco del régimen de transición establecido en el acuerdo 049 de 1990.*

*En el segundo procedimiento, la peticionaria señaló que el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla reconoció su derecho de pensión de vejez con un valor que asciende a \$ 1.153.760, a partir del 25 de abril de 2010. Además, comunicó que el Tribunal Superior de Barranquilla en ejercicio del grado jurisdiccional de consulta confirmó el derecho pensional y señaló que el monto de la prestación corresponde al 87%, empero se abstuvo de ordenar ese aumento para evitar quebrantar el principio de la non reformatio in pejus. La actora solicitó al ISS que aumentara su porcentaje del IBL del 75 % a 87%, pues tenía 1.202 semanas de cotización, petición que nunca obtuvo respuesta (Min 1.03 - DC en el Folio 45 Cuaderno 3).*

*Los citados hechos fueron calificados jurídicamente como condiciones necesarias para que el monto de la pensión corresponda al 87 % del ingreso base de liquidación, en la medida en que cotizó 1.202 semanas y el acuerdo 049 de 1990, régimen de transición que benefició a la actora, reconoce ese porcentaje.*

*Una vez establecida la causa petendi de los procesos de reconocimiento de pensión y de reliquidación pensional antes mencionados, es posible advertir, luego de un ejercicio simple de comparación, que no existe la identidad que se requiere para que la cosa juzgada pudiera configurarse en el proceso de la reliquidación de la pensión de vejez. Mientras la primera demanda se fundamentó en el número de semanas cotizadas y en la edad de la tutelante para poseer la calidad de pensionada, las súplicas de la reliquidación pensional se basaron en la declaración del derecho a la pensión y en las condiciones del mismo, supuestos posteriores a los primeros. Por ende, los hechos no concurren en la misma situación fáctica y son consecutivos, pues solo con la certeza del número de semanas cotizadas la actora pudo alegar la reliquidación.*

*La calificación jurídica de los hechos antes anotados, es decir, el componente jurídico de la causa petendi es diferente en ambos casos. En el proceso de reconocimiento pensional, los supuestos fácticos juridizados correspondieron con los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de transición. En contraste, en el trámite de reliquidación el componente de hecho se calificó como la modificación del monto de la pensión a 87%. La diversidad en la calificación jurídica de los hechos en ambos procesos salta a la vista y, por ello, la falta de identidad en el componente jurídico de la causa petendi es evidente.*

*Adicionalmente, los procesos citados cuentan con objetos disímiles.*

*En el primer trámite se solicitó el reconocimiento de una pensión, es decir, la declaración de una manifestación del derecho a la seguridad en la prestación de vejez. El petitorio de la actora se identifica con la auto-atribución del derecho de pensión, pues esa garantía se solicitó en la demanda. La resistencia de esa pretensión se centró en argumentar la excepción por carencia del objeto reclamado y la prescripción (Folio 21 Cuaderno 2). Las autoridades judiciales reconocieron a la tutelante el derecho deprecado. Cabe resaltar que el juez debió establecer un monto de pensión para reconocer el derecho prestacional, empero ese estudio no implicó que el funcionario jurisdiccional estudiara la pretensión de reliquidación de la prestación, puesto que ello no fue objeto de reclamo en el libelo, ni de negación en la contestación de la demanda. La actora no pidió un porcentaje de pensión específico y la entidad demandada tampoco rechazó un monto de la prestación de vejez.*

*En el segundo procedimiento, la peticionaria suplicó la reliquidación de la prestación concedida en el anterior trámite y se auto-atribuyó el derecho a tener un mayor monto, afirmación que no se corresponde con el reconocimiento de un derecho pensional. La entidad accionada no contestó la demanda y en el recurso de*

*alzada alegó la excepción de la cosa juzgada. El juez de primera instancia reconoció la pretensión de la petente, sin embargo el ad-quem revocó esa decisión.*

*Así las cosas, la discusión jurídica y el petitum de la demandante fue diferente en el proceso de reconocimiento de su pensión con relación al trámite de la reliquidación de esa prestación.*

*Entonces, la inexistencia de identidad de causa y de objeto entre el proceso que reconoció la pensión de vejez a la actora y el procedimiento de la reliquidación de esa prestación se produjo por una inadecuada comprensión de esas figuras jurídicas, y ello, permitió la configuración de un defecto sustantivo que afecta los derechos de la peticionaria”*

Con base en lo anterior, debe señalarse que en el proceso adelantado en el Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín, se discutió fue el derecho que le asistía o no a la señora BLANCA LIGIA GARCIA DE MEJIA, en calidad de cónyuge supérstite, respecto de la pensión de sobrevivientes que había dejado causada el señor JOSE ALBERTO MEJIA LONDOÑO, quien era pensionado por vejez por parte del otrora ISS mediante Resolución No. 005336 de 2004, mientras que en el proceso aquí debatido lo que se busca es el reajuste de la mesada pensional que como sustitución pensional viene recibiendo la demandante, por cuanto el valor que se le está pagando difiere del que como mesada pensional percibía su cónyuge; es decir, existe una diferencia tanto en la causa petendi como en el objeto entre un proceso y otro, lo que implica que no se presentan los elementos constitutivos de la cosa juzgada.

Siendo lo anterior cierto, y con el ánimo de resolver el asunto puesto a consideración de esta Sala de Decisión, sea del caso memorar que el artículo 48 de la Ley 100 de 1993 es claro al regular el monto de la pensión de sobrevivientes cuando fallece un pensionado:

*“El monto mensual de la pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100% de la pensión que aquel disfrutaba...”*

Como se dijo, no está en discusión que el señor JOSE ALBERTO MEJIA LONDOÑO se encontraba pensionado por el ISS -hoy Colpensiones- al momento de su muerte, y que para su deceso estaba disfrutando de una mesada pensional en cuantía de \$2.307.804, tal como se avizora a folio 10 del expediente, lo que implica que a la señora GARCÍA DE MEJÍA se le debe reconocer el derecho a la sustitución pensional en el porcentaje del 79% asignado en la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión sobre esta cuantía, sin que sea óbice para tal reconocimiento en este proceso el que, mediante una sentencia judicial anterior, a la demandante se le haya reconocido el derecho a la pensión de sobrevivientes en cuantía del salario mínimo legal mensual, dado que tal circunstancia se presentó porque la juez del mismo no encontró probada una suma diferente. Textualmente dijo:

*“Teniendo en cuenta que dentro del plenario no reposa prueba alguna del monto de la pensión de vejez que recibía el señor JOSE ALBERTO MEJÍA LONDOÑO en vida, y toda vez que ninguna pensión puede ser inferior al SMLMV, se tomará para liquidar el retroactivo correspondiente, los salarios mínimos de cada año y partiendo de este para el 2010 (\$515.000) y hasta el 31 de julio de 2013...”*

Y es que no resulta pertinente mantener lo decidido por el juzgador al momento de dictar sentencia, por cuanto, como se dijo, no se configura el fenómeno de la cosa juzgada en los términos ya descritos; y del otro, mantener tal decisión, conllevaría a violentar los derechos pensionales mínimos de los pensionados, lo que en otras palabras significaría incurrir en una causal genérica de procedibilidad (vía de hecho), lo cual es desde todo punto de vista inaceptable. En otras palabras, era imperioso corregir la decisión judicial que señalaba el monto de la pensión en el salario mínimo legal mensual vigente.

En esta materia es del caso rememorar lo dicho por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia en innumerables

decisiones, v. gr. en la sentencia con radicado SL5141-2019, en la cual quedó dicho:

*“Al respecto, en reiteradas ocasiones esta Corte ha señalado que la prestación de sobrevivientes, a causa de una sustitución pensional, no es un derecho originario sino derivado de uno previamente causado, y, por tanto, su transmisión es procedente en favor de los beneficiarios en las mismas condiciones que venía siendo concedida, claro está previo cumplimiento de los restantes requisitos establecidos por la ley”.*

Por tanto, sin necesidad de otro tipo de consideraciones, la sentencia venida en apelación se habrá de revocar, dando lugar entonces al reconocimiento del reajuste pensional deprecado por la parte demandante.

Ahora bien, hechos los cálculos de rigor por parte de esta Corporación, se encuentra que el valor del retroactivo por reajuste pensional asciende a la suma de \$264.330.298 (anexo 1), liquidado entre el 13 de febrero de 2010, fecha del reconocimiento del derecho pensional, y el 31 de mayo de 2021, teniendo en cuenta el porcentaje del 79% sobre el valor de la pensión de sobrevivientes reconocido anteriormente y que la reclamación del reajuste aquí solicitado, es decir, el que se genera entre una pensión equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, que fue el dispuesto en la sentencia que se dictó en el proceso que le reconoció a la aquí demandante el derecho pensional (véase fls. 14 a 23) y el monto de la pensión que aquí se reconoce, que no es otro que uno superior, fue reclamado por primera vez el 29 de septiembre de 2017 (véase fls. 30/35), y la demanda se instauró el 13 de diciembre de 2018 (fl. 6), lo que se traduce en los términos del artículo 151 del C.P. del T. y de la S.S. en una interrupción de la prescripción por un término igual, es decir, uno de 3 años, lo que significa que no ha operado este medio exceptivo y, por tanto, el derecho al reajuste le asiste a la demandante desde que se causó el derecho a la pensión de sobrevivientes.

Se AUTORIZA a Colpensiones a descontar de dicho retroactivo, lo correspondiente a las cotizaciones para el Sistema General de Seguridad Social en Salud. A partir del 1° de junio de 2021, Colpensiones deberá continuar pagándole a la señora BLANCA LIGIA GARCIA DE MEJIA, una mesada pensional en cuantía de \$2.701.326, correspondiente al 79% del valor de la mesada que le correspondería al causante señor JOSÉ ALBERTO MEJÍA LONDOÑO para esa anualidad en la suma de \$3.419.401.

En este asunto la Sala quiere precisar que solo con la sentencia que se dictó en el proceso que reconoció la pensión de sobrevivientes a la actora, confirmada por esta Corporación en providencia del 30 de noviembre de 2015, fue que advirtió el desfase en el monto de la pensión, por lo que es a partir de tal momento en que se cuenta el tiempo para contabilizar el término de prescripción contenido en las normas transcritas, destacándose que la demandante fue diligente en adelantar los trámites tendientes al reajuste de la mesada pensional.

AÑO	IPC	VALOR RECONOCIDO	VALOR REAL	DIFERENCIA MENSUAL	NUMERO MESES	TOTAL
2002	7,65%	\$ 244.110	\$ 1.192.864	\$ 948.754		\$ 0
2003	6,99%	\$ 262.280	\$ 1.276.245	\$ 1.013.965		\$ 0
2004	6,49%	\$ 282.820	\$ 1.359.074	\$ 1.076.254		\$ 0
2005	5,50%	\$ 301.385	\$ 1.433.823	\$ 1.132.438		\$ 0
2006	4,85%	\$ 322.320	\$ 1.503.363	\$ 1.181.043		\$ 0
2007	4,48%	\$ 342.623	\$ 1.570.714	\$ 1.228.091		\$ 0
2008	5,69%	\$ 364.585	\$ 1.660.087	\$ 1.295.502		\$ 0
2009	7,67%	\$ 392.551	\$ 1.787.416	\$ 1.394.865		\$ 0
2010	2,00%	\$ 406.850	\$ 1.823.164	\$ 1.416.314	12,60	\$ 17.845.559
2011	3,17%	\$ 423.124	\$ 1.880.959	\$ 1.457.835	14	\$ 20.409.683
2012	3,73%	\$ 447.693	\$ 1.951.118	\$ 1.503.425	14	\$ 21.047.954
2013	2,44%	\$ 465.705	\$ 1.998.726	\$ 1.533.021	14	\$ 21.462.288
2014	1,94%	\$ 486.640	\$ 2.037.501	\$ 1.550.861	14	\$ 21.712.052
2015	3,66%	\$ 509.036	\$ 2.112.073	\$ 1.603.037	14	\$ 22.442.523
2016	6,77%	\$ 544.669	\$ 2.255.061	\$ 1.710.392	14	\$ 23.945.484
2017	5,75%	\$ 582.796	\$ 2.384.727	\$ 1.801.931	14	\$ 25.227.030
2018	4,09%	\$ 617.181	\$ 2.482.262	\$ 1.865.081	14	\$ 26.111.135
2019	3,18%	\$ 654.212	\$ 2.561.198	\$ 1.906.986	14	\$ 26.697.804
2020	3,80%	\$ 693.464	\$ 2.658.524	\$ 1.965.060	14	\$ 27.510.833
2021	1,61%	\$ 717.735	\$ 2.701.326	\$ 1.983.591	5	\$ 9.917.954
TOTAL						\$ 264.330.298

En cuanto a los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, baste decir que los mismos no tienen cabida en el de marras, toda vez que Colpensiones siempre ha actuado conforme a la Ley, pues así quedó dicho en la resolución SUB 257074 del 15 de noviembre de 2017, en la que expresamente dijo:

*“Que ante las razones plasmadas ulteriormente y dado que se desprende que por conducto de la resolución No. GNR 198479 de 06 de JULIO DE 2016, se da cumplimiento al fallo Ordinario Laboral del JUZGADO SEPTIENO LABORAL DE DESCONGESTION DEL CIRCUITO DE MEDELLIN No. 2011-01082-00.*

*Luego entonces, conforme a la solicitud enervada se indica que no se accede a la misma, esto es a la reliquidación de la Pensión de Sobrevivientes que es perciba (sic) por las señoras GARCIA DE MEJIA BLANCA LIGIA ya identificado (a) y PEREZ AGUDELO ALBA ROCIO ya identificada, de acuerdo a los fundamentos descritos en los párrafos pretéritos” (resaltados originales)*

En estos términos habrá lugar a reconocer la indexación sobre el retroactivo pensional, pues es evidente que en economías inflacionarias como la nuestra, el solo paso del tiempo genera una pérdida de valor en el dinero, el cual se compensa con el reconocimiento de esta prestación, la que deberá ser calculada por la entidad teniendo en consideración la causación de cada diferencia pensional y la fecha efectiva de pago.

Las excepciones propuestas quedan explícita e implícitamente resueltas, dada la manera como se resuelve el asunto.

No existiendo otros puntos que estudiar y resolver, la decisión venida en apelación se habrá de revocar. Las costas de las instancias estarán a cargo de Colpensiones, tal como lo señala el numeral 4 del artículo 365 del Código General del Proceso, fijándole como agencias en derecho en esta instancia la suma de uno y medio (1 ½) SMLMV.

### DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

1. Se CONDENA a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- a reconocerle y pagarle a la señora BLANCA LIGIA GARCÍA DE MEJÍA con c.c. 32.331.600, la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$264.330.298), por concepto de retroactivo del reajuste pensional, liquidado entre el 13 de febrero de 2010 y el 31 de mayo de 2021.

PARÁGRAFO 1: Se AUTORIZA a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, a descontar del valor del retroactivo pensional, lo relativo a las cotizaciones para el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

PARÁGRAFO 2: A partir del 1° de junio de 2021, COLPENSIONES deberá continuar pagándole a la señora BLANCA LIGIA GARCÍA DE MEJÍA con c.c. 32.331.600, una mesada pensional en cuantía de DOS MILLONES SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$2.701.326), correspondiente al 79% del valor de la mesada que le correspondería al causante señor JOSÉ ALBERTO MEJÍA LONDOÑO para el año 2021 en la suma de \$3.419.401.

2. Se CONDENA a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- a reconocerle y pagarle a la señora BLANCA LIGIA GARCÍA DE MEJÍA con c.c. 32.331.600, la indexación sobre el retroactivo pensional, conforme a lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. Se ABSUELVE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- de las demás pretensiones formuladas en su contra por la señora BLANCA LIGIA GARCÍA DE MEJÍA.
4. Se DECLARAN no probadas las excepciones
5. Costas de las instancias a cargo de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, fijándole como agencias en derecho en esta la suma de uno y medio (1 ½) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De esta manera queda REVOCADA la sentencia venida en apelación.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS** de que trata el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.

Los Magistrados,

CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por ESTADOS N° 117 fijados el 7 de julio de 2021  
En la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

---

El secretario.